



Magistrada Ponente (E) Dra. Lyda Yazmin Cepeda Trujillo

RESOLUCION No. CSJHUR18-22
lunes, 22 de enero de 2018

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL HUILA

En ejercicio de las facultades legales conferidas en el numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y en especial las reglamentarias establecidas en el Acuerdo PSAA11- 8716 de 2011 y según lo aprobado en sesión ordinaria del 17 de enero de 2018 y,

CONSIDERANDO

1. El abogado Ricardo Gómez Manchola, quien actúa como apoderado del BBVA Colombia, mediante escrito radicado el 4 de diciembre de 2017, solicitó adelantar vigilancia Judicial Administrativa al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, argumentando mora para resolver un recurso de reposición contra el auto de 13 de julio de 2017 y una solicitud presentada el 5 de septiembre de 2017.
2. Mediante auto del 6 de diciembre de 2017, se ordenó requerir al doctor Ernesto German Villegas Caldero, con el fin de que rindiera las explicaciones del caso, con relación a cada uno de los hechos y afirmaciones realizadas por el peticionario.
3. El funcionario oportunamente rindió el informe, en resumen, en los siguientes términos:
 - 3.1. Que la demanda fue radicada en la fecha que indica el solicitante.
 - 3.2. El proceso ejecutivo singular se admitió el 2 de junio de 2016, una vez subsanada la demanda por la parte interesada y decretaron medidas cautelares.
 - 3.3. En auto de 4 de agosto de 2016, se decretó medida cautelar sobre vehículo automotor y el 8 de septiembre de 2016 se decidió frente a una solicitud remanentes.
 - 3.4. Mediante providencia de 2 de noviembre de 2016 se ordenó el emplazamiento del demandado y el 28 de noviembre de 2016 el despacho solicitó nuevamente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva por la solicitud de remanentes.
 - 3.5. Una vez adelantados los trámites de fijación del edicto emplazatorio en medio de amplia circulación nacional y posteriormente su registro en el Registro Nacional de personas emplazadas, el despacho mediante providencia de 30 de marzo de 2017 designó curador ad-litem.
 - 3.6. El 13 de julio de 2017, el despacho no dio trámite a la solicitud de cesión del crédito presentada por la parte interesada y tiene notificada por conducta concluyente al demandado, dentro del término de ejecutoria al apoderado de la parte actora interpone recurso de reposición ingresando al despacho el 14 de agosto de 2017.

4. Analizadas las explicaciones dadas por el funcionario requerido, el despacho sustanciador, mediante auto del 15 de diciembre de 2017, dispuso la apertura de la vigilancia judicial administrativa contra el Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, ordenándose requerir nuevamente al citado funcionario, de conformidad con el artículo sexto del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, concediéndole un término de tres (3) días para que presentara las explicaciones y justificaciones respecto del incumplimiento del término previsto en el artículo 120 del Código de General del Proceso, para resolver el recurso de reposición interpuesto por el doctor Ricardo Gómez Manchola.
5. El doctor Ernesto German Villegas Calderón, expuso los siguientes argumentos¹.
 - 5.1. Con la entrada en vigencia del Código General del proceso llevo consigo la apertura de los despachos de pequeñas causas los cuales le correspondió conocer de todo asunto contencioso de mínima cuantía, situación que trajo consigo un estado de cosas insostenible para los usuarios que esperan una pronta administración de justicia.
 - 5.2. Por otro lado, los memoriales recibidos a diario a través de la oficina judicial correspondencia en virtud de solicitudes al interior del proceso que ya se están tramitando los cuales oscilan entre 50 a 70 por día, así como los incidentes de desacato dentro de las tutelas que ha conocido esta dependencia, llevaron a que no hubiera certeza de día cierto de revisión de cada uno de los asuntos que diariamente ingresan a despacho.
 - 5.3. Por otra parte la planta de personal es de tres empleados diferente a la de los Juzgados Civiles municipales.
 - 5.4. Que en virtud del Acuerdo CSJHUA17-466 de 25 de mayo de 2017, disminuyo la cantidad de ingreso de proceso a partir de junio de 2017, pero aún no ha sido posible ponerse al día un aspecto fundamental como lo son las admisiones, las cuales tienen carácter prioritario para el juzgado, según plan de trabajo comunicado por el Consejo Seccional en el cual se espera que a 31 de marzo hay un punto de equilibrio en los ingresos diarios y así poder atender otras solicitudes
 - 5.5. Por ultimo remite copia de la providencia de 12 de enero de 2018, mediante la cual se resolvió la objeción interpuesta por el apoderado del BBVA.
6. Conforme a los hechos expuestos por el solicitante y las explicaciones dadas por el Juez, corresponde a esta Corporación entrar a decidir si el funcionario judicial ha incurrido en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de Justicia, a la luz del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual es pertinente señalar lo siguiente:
 - 6.1. La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior mediante Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, normas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar por el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial².
 - 6.2. En el mismo sentido, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Circular PSAC-53 de 2010, señaló que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción de carácter

¹ Oficio No.0156 de 9 de noviembre de 2017

² Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, artículo 1º.

eminentemente administrativo que busca que la administración de Justicia sea eficaz y oportuna bajo el respeto de la autonomía e independencia judicial (Art. 230 de la C.P. y 5º de la Ley 270 de 1996).

- 6.3. Según lo dispuesto por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, la Vigilancia Judicial Administrativa opera cuando un funcionario judicial incurre en prácticas dilatorias o **mora judicial injustificada**, que atente contra la eficaz y oportuna administración de justicia, situación ésta que conllevaría a la aplicación de una sanción de tipo administrativo.
- 6.4. La mora judicial es definida como "la conducta dilatoria del Juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial y tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable"³.
7. Es claro señalar entonces que el ámbito de aplicación de la Vigilancia Judicial Administrativa apunta exclusivamente a que se adelante un control y verificación de términos en el desarrollo de las etapas procesales, en procura de una administración de justicia eficaz y oportuna, para advertir dilaciones injustificadas imputables, bien sea al funcionario o al empleado del despacho donde cursa el proceso.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Sentadas las anteriores premisas, se debe indicar que la petición de vigilancia judicial administrativa radica en que no se ha resuelto un recurso de reposición interpuesto por la parte demandante, contra el auto de 13 de julio de 2017, relacionado con la negativa de la solicitud de cesión del crédito dentro del proceso ejecutivo con radicado 2016-00348-00.

De acuerdo a la información suministrada por el Juez Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, solo hasta el 12 de enero de 2018 fue resuelto el recurso de reposición debido a la considerable congestión que viene manejando ese despacho judicial, respecto de los procesos que se reciben por reparto diariamente, así como de las múltiples peticiones que se reciben para los procesos que ya se encuentran en trámite; tal cúmulo imposibilita que el recurso fuera resuelto en su oportunidad, si se tiene en cuenta la prioridad de las demás solicitudes.

Esta Corporación no desconoce la situación actual de los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, por lo cual ha solicitado al Consejo Superior de la Judicatura la modificación de dicha medida de reordenamiento, mediante oficios CSJH-PSA15-1624 del 3 de diciembre de 2015, CSJH-PSA16-329 del 22 de febrero de 2016 y CSJH-PSA16-1004 del 7 de junio de 2016, para que se conviertan en un Juzgado Civil Municipal y en uno Laboral de Pequeñas Causas, lo cual se encuentra en estudio por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

De otro lado, mediante Acuerdo CSJHAU17-466 del 25 de mayo de 2017, ésta Corporación delimitó la competencia territorial de los Juzgados Primero y Segundo Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, con el fin de descongestionar provisionalmente estos despachos judiciales y poder garantizar a la ciudadanía un servicio público oportuno.

Así mismo, ésta Corporación dentro de las competencias asignadas y con el fin contrarrestar la carga laboral de estos despachos, ordenó el cierre del reparto a los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, de los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, excepto en

³ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de abril de 2008. Consejero Ponente: Dr. Héctor J. Romero Díaz. Rad.:11001-03-15-000-2008-00324-00

los que se ejerciten derechos reales, así como de las acciones constitucionales, hasta el 31 de diciembre del año pasado, medida que fue prorrogada mediante el Acuerdo CSJHUA17-502 del 12 de diciembre de 2017, comprometiéndose los citados despachos a realizar un plan de trabajo, para lo cual deberán fijarse metas de evacuación de las demandas presentadas durante el año 2017 que estén pendientes de admitir, con un plazo máximo hasta el 30 de marzo de 2018.

Al respecto es importante traer a colación el siguiente pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional:

“La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”⁴.

CONCLUSION

Analizada en detalles las situaciones fácticas puestas de presente y teniendo en cuenta que el mecanismo de vigilancia judicial apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, esta Corporación se abstendrá de aplicar el trámite de la vigilancia judicial administrativa, en contra del doctor Ernesto German Villegas Calderón, Juez Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, dada la mora justificada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila.

RESUELVE

ARTÍCULO 1. ABSTENERSE de aplicar el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa contra el doctor Ernesto German Villegas Calderón, Juez Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR la presente Resolución al abogado Ricardo Gómez Manchola, en su condición de solicitante y al doctor Ernesto German Villegas Calderón, Juez Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, como lo disponen los artículos 66 a 69 del C.P.A.C.A. Llíbrense las comunicaciones del caso.

⁴ Sentencia T-230 del 18 de abril de 2013

ARTÍCULO 3. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, por ser éste trámite de única instancia a la luz de la Ley 270 de 1996, el cual de conformidad al art. 74 del CPACA deberá interponerse ante esta Sala dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 77 ibídem.

ARTÍCULO 4. Una vez se adelante el trámite correspondiente y en firme el presente acto administrativo, las diligencias pasaran al archivo definitivo.

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Neiva, Huila



JORGE DUSSAN HITSCHERICH
Presidente

JDH/LYCT